

**GENOCIDIOS Y CRÍMENES
CONTRA LA HUMANIDAD**

El coste del genocidio

SAMANTHA POWER

RAFael Lemkin, un jurista polaco que había perdido cuarenta y nueve miembros de su familia en el Holocausto, inventó el término de 'genocidio' en 1944 porque creía que, después del 'asesinato racista' de los armenios y de la campaña de exterminio de Hitler contra los judíos era preciso que los poderes del mundo 'civilizado' se unieran para poner fuera de la ley a crímenes que 'chocaban la conciencia'. Antes de que Lemkin acuñara el término, la persecución y asesinato sistemático de grupos nacionales, étnicos o religiosos se conocía como 'barbarie', una palabra que, para Lemkin, no conseguía expresar el horror del crimen. 'Genocidio', esperaba, haría temblar a quienes lo escucharan y les obligaría a prevenir, castigar e, incluso, suprimir la carnicería.

Lemkin, historiador no profesional de las matanzas masivas desde los tiempos medievales hasta el siglo xx, sabía que el genocidio continuaría ocurriendo con 'regularidad biológica'. Más aún, tras revisar el pasado reciente, sabía que si se dejaba que los líderes políticos decidieran cómo responder, inevitablemente privilegiarían los intereses a corto plazo, tanto sobre el imperativo moral de detener el genocidio como sobre las consecuencias a largo plazo de haberlo ignorado.

En 1948, en gran parte gracias al empuje del propio Lemkin, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el primer tratado de derechos humanos, la Convención del Genocidio, que requería que los signatarios 'previnieran y castigaran' el genocidio. El lenguaje de la Convención era vago precisamente en la cuestión de cómo los Estados miembros de las Naciones Unidas habrían de cumplir con sus obligaciones, en su texto no se hacía mención de la intervención militar y se confiaba en que el procesamiento de los futuros 'genocidistas', hecho internamente por los respectivos tribunales nacionales, impediría las masacres. Los enérgicos debates que se produjeron en los correspondientes parlamentos nacionales con ocasión de la ratificación del Convenio probaban la seriedad con la que los delegados creían que estaban comprometiendo los recursos y el prestigio de sus respectivos países en la prohibición del asesinato de grupos perseguidos.

Ha transcurrido más de medio siglo desde que entró en vigor la Convención del Genocidio, pero el genocidio siguen en pie. La cobertura periodística de las atrocidades ha provocado la indignación, pero ésta ha sido por lo general insuficiente como para alentar la acción del mundo occidental. Como mostraron los años 1990, especialmente en las reacciones de los Estados Unidos y de Europa ante la carnicería de Yugoslavia y Ruanda (escenario, en 1994, de la campaña genocida más rápida y eficiente del siglo xx), los países occidentales repitieron el modelo establecido en sus primeras respuestas ante el ascenso y dominación de Hitler, bastante después de que, supuestamente, hubieran internalizado las 'lecciones del Holocausto'.

Para entender estas pautas de comportamiento —y, por extensión, para acabar con ellas— hemos de hacer frente, en primer lugar, al macabro registro de las respuestas dadas al genocidio en el siglo xx. En 1915, el ministro turco del Interior, Talaat Pasha, y los otros líderes de los Jóvenes Turcos se decidieron a resolver el 'problema armenio' asesinando a los intelectuales armenios más destacados y deportando al resto de la población al desierto, en donde muchos morirían a manos de la policía local, por hambre, o por enfermedad. Murió cerca de un millón de armenios. Alemania, aliada de Turquía en la guerra, encubrió de forma activa los informes que testigos presenciales hicieron de las atrocidades. Rusia, Gran Bretaña y Francia, que luchaban en la guerra contra Turquía y Alemania, publicaron informes terribles de las masacres. Los Aliados pidieron a los Estados Unidos que utilizaran su influencia como potencia neutral, bien para convencer a Turquía para que enmendara sus actuaciones o bien para presionar a Alemania para que frenara a su aliado. La administración de Woodrow Wilson mantuvo cuidadosamente su neutralidad, que era ampliamente apoyada por el pueblo americano y se resistió a los llamamientos en pro de una intervención diplomática. Con la excepción del embajador de los Estados Unidos en Constantinopla (hoy Estambul), Henry Morgenthau, Sr., y otros representantes consulares, los funcionarios estadounidenses permanecieron mudos. Una organización no gubernamental conocida como el Comité de Atrocidades Armenias (Armenia Atrocities Committee) atrajo la atención pública hacia el asesinato de cristianos e incluso consiguió recolectar algún dinero para ayuda humanitaria. Pero el grupo provocó la ira del antiguo presidente Theodore Roosevelt porque denunciaba de forma simultánea el asesinato turco y se oponía a la intervención militar estadounidense con llamamientos pacifistas a favor de 'anteponer la seguridad'. Al final, a pesar de la gran cobertura de los horrores turcos en el *New York Times* y otros lugares, Wilson no adoptó medidas que hubieran puesto en duda la neutralidad de los Estados Unidos. Cuando éstos entraron por fin en la guerra en 1917, no declararon la guerra a Turquía

y, en la posguerra, no se unieron a los esfuerzos hechos por los Aliados para juzgar a los criminales de guerra turcos.

El genocidio nazi, que se produjo dos decenios más tarde, quitó la vida a seis millones de judíos, cinco millones de polacos, gitanos, homosexuales y oponentes políticos. Antes del Holocausto ni los diplomáticos europeos ni los estadounidenses elevaron muchas protestas cuando Alemania promulgó las Leyes de Nuremberg y comenzó a destruir los negocios, las sinagogas y los hogares judíos. Gran Bretaña y Francia fueron a la guerra contra Alemania una vez que ésta invadió Polonia en septiembre de 1939. Pero el presidente Franklin Roosevelt, al igual que Wilson, mantuvo la neutralidad americana. Sólo después de que los japoneses atacaran Pearl Harbor y después de que Adolf Hitler declarara la guerra contra los Estados Unidos, se unieron éstos a la lucha europea. Juntos, los Aliados no hicieron nada directamente dirigido a impedir el exterminio de los judíos por los nazis. Temían que dirigir la atención hacia el asesinato de los judíos o admitir refugiados adicionales minaría el apoyo público a la guerra. En consecuencia, minimizaron la importancia de los numerosos y gráficos informes que pudieron ser sacados fuera del territorio ocupado por los nazis, o interceptados por los funcionarios de los servicios de Inteligencia de los Aliados. Se refugiaron en lo absolutamente inconcebible que era lo que esos documentos decían. A aquellos que presionaban para que se adoptaran medidas más severas, los líderes occidentales les contestaban argumentado que los Aliados conseguirían mucho más centrándose en los recursos militares y logrando victorias en el campo de batalla que interrumpiendo el tráfico de los campos de concentración.

Los procesos de Nuremberg y de Tokio juzgaron a los perpetradores más destacados de los crímenes contra la humanidad después de la segunda Guerra Mundial, pero los líderes políticos vieron el crimen real de las potencias del Eje en que éstas habían cometido un 'crimen contra la paz'. Aunque el mero hecho del juicio representó una importante merma en la soberanía del Estado, los perpetradores de los tiempos de guerra no fueron juzgados por los crímenes que habían cometido antes de la invasión nazi de Polonia. No se consideraba que el pecado cardinal fuera el 'genocidio' de Hitler (un término que se utilizó muy escasamente en Nuremberg) sino la agresión fronteriza, que era una amenaza permanente para la estabilidad internacional y, por inferencia, para los intereses estratégicos de las primeras potencias mundiales.

La Convención del Genocidio de 1948, al contrario, hizo responsables a los líderes políticos por el genocidio cometido durante los tiempos de paz, así como en los de guerra, dentro o fuera de un Estado. Todavía en 1969 Gran Bretaña seguía manteniendo un activo apoyo al gobierno nigeriano cuando éste asesinaba y mataba de hambre al pueblo Ibo de Biafra. Contemplando las potenciales reservas petrolíferas

de *Iboland*, la tierra de los Ibo, los Estados Unidos y otras potencias europeas siguieron la pauta británica, oponiéndose a la secesión de Biafra e insistiendo en que se les hicieran llegar alimentos por Lagos, a pesar de que el gobierno de Nigeria utilizaba abiertamente el hambre como un arma de guerra. Dos años después, los poderes occidentales no protestaron cuando Pakistán respondió al movimiento autonomista de Bengala, en Pakistán oriental, enviando al ejército y matando a más de un millón de personas. La administración Nixon apoyó a Pakistán, que era su intermediario con la República de China Popular y cuando el cónsul general de los Estados Unidos en Dhaka mostró su desacuerdo el Departamento de Estado lo relevó de su puesto. En 1972, cuando el gobierno Tutsi de Burundi mató a varios cientos de miles de Hutus, los poderes occidentales minimizaron las atrocidades, tratándolas como un 'asunto interno'. En estos tres casos de genocidio los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos y de sus aliados europeos les llevaron a ponerse de parte de los gobiernos genocidas y a invocar la 'soberanía' como una excusa para impedir incluso la presentación de quejas.

Uno habría podido esperar una respuesta más enérgica al genocidio camboyano que tuvo lugar entre 1975 y 1979 porque eran los comunistas radicales (conocidos como Jemeres Rojos) los que asesinaron a cerca de dos millones de personas de un país de siete millones de habitantes. Pero en la inmediata posguerra de Vietnam los gobiernos occidentales prestaron escasa atención al derramamiento de sangre cometido en una parte del mundo que estaban ansiosos por dejar atrás. El presidente Gerald Ford denunció durante un mes las masacres de los Jemeres Rojos pero después permaneció en completo silencio. El presidente Jimmy Carter, el primer presidente de los Estados Unidos que encabezó la lucha por los derechos humanos, no hizo mención de la matanza de Pol Pot en los dos primeros años de su presidencia. Aunque los Estados Unidos habían reanudado sus relaciones diplomáticas con China, los funcionarios estadounidenses no pidieron a China que utilizara su influencia con los Jemeres Rojos. Una vez que los vietnamitas derrocaron el régimen genocida de los Jemeres Rojos en enero de 1979, la administración Carter, la administración Reagan y todas las potencias europeas mantuvieron el reconocimiento del régimen, en lugar de permitir que el gobierno de los vietnamitas instalado en Camboya tuviera asiento en las Naciones Unidas o de dejar vacío el escaño de la ONU. Los representantes del régimen de Pol Pot siguieron ocupando su escaño en las Naciones Unidas durante otro decenio más.

En 1987-1988 el dictador iraquí Sadam Hussein comenzó a eliminar a la población rural kurda de Irak. Los soldados y la policía iraquíes derribaron a golpe de bulldozer varios miles de pueblos, detuvieron y ejecutaron a los hombres, mujeres y niños que se habían quedado en los hogares que estaban dentro de las «zonas prohibi-

das» por Hussein y utilizaron armas químicas contra el pueblo kurdo haciendo huir a decenas de miles de civiles a los países vecinos, Turquía e Irán. Varios estados europeos armaron a Hussein durante este período, y la administración Reagan le concedió más de cinco mil millones de dólares en créditos agrícolas e industriales. Durante el primer año de la campaña contra los kurdos ningún estado occidental condenó las atrocidades, ni siquiera de forma privada. Cuando los senadores Claiborne Pell (D-R.I) y Jesse Helms (R-N.C) introdujeron una legislación sancionadora, que hubiera suspendido el generoso programa de créditos, la administración Reagan y el lobby de los granjeros bloquearon la medida, aunque el número de víctimas causadas por los ataques de gas de Hussein ocupara las primeras páginas de toda la prensa. La postura que adoptó la Casa Blanca se debió a que había decidido mantener relaciones amistosas con su aliado del Golfo (y enemigo de su enemigo, Irán) y apoyar los intereses de los granjeros e industriales estadounidenses. Esta política fue ampliamente apoyada por muchos de los legisladores del Capitolio.

Con el final de la guerra fría y el aparente renacimiento de las Naciones Unidas (ayudado por lo obsoleto del veto de las superpotencias) se hubiera podido esperar una mayor disposición a prevenir el genocidio. Pero el modelo de no intervención establecido en 1915 demostró ser duradero. En 1992, cuando los serbo-bosnios comenzaron a deportar y asesinar de modo sistemático a los musulmanes y los croatas de Bosnia, los Estados Unidos y Europa decidieron no intervenir con ataques aéreos para proteger a los civiles. Decidieron asimismo no levantar el embargo de armas contra los musulmanes, a pesar de saber que la medida congelaba el gran desequilibrio que existía sobre el terreno entre los musulmanes carentes de armamento y sus enemigos serbios, que habían heredado el arsenal del Ejército Nacional Yugoslavo. Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos respondieron a la presión pública enviando misiones de paz, pero los Estados Unidos se negaron a arriesgar a sus soldados para proteger a un pueblo sitiado, o para proporcionarle alimentos. Los líderes europeos y americanos fueron unánimes en su creencia de que «no se les había perdido nada» en la contienda. Cuando Bill Clinton ocupó el Despacho Oval en 1993 criticó la tendencia de sus antecesores a culpar de la violencia a «todas las partes» señalando que el grueso de las atrocidades estaban siendo cometidas por los serbios. Pero no se opuso a la dominante política de no intervención. Temiendo la confrontación con los militares, no seguro de contar con apoyo político interno y decidido a evitar una «americanización» de la guerra y a poner en peligro a los soldados estadounidenses, Clinton evitó emprender acciones significativas. Unas doscientas mil personas fueron asesinadas en tres años y medio de guerra.

En el genocidio de Ruanda, que ocurrió en 1994, dos años después del comienzo de la guerra de Bosnia, se asesinó a unos ochocientos mil Tutsis y Hutus moderados en un período de mil días. Francia armó y defendió políticamente al gobierno genocida. Bélgica, que contribuyó con soldados a la misión de la ONU enviada para intentar prestar ayuda a la formación de un gobierno conjunto entre Hutus y Tutsis, sacó a sus soldados de Ruanda a pesar de su detallado conocimiento del ritmo y alcance de las primeras masacres. La administración Clinton, quemada por el fallo de su misión en Somalia, mantuvo a las tropas estadounidenses alejadas del escenario del crimen. Pero, lo que resulta todavía más notable, a pesar de saber que los Tutsis estaban siendo sistemáticamente asesinados, el equipo de Clinton pidió que toda la misión de la ONU se retirara de Ruanda y, después, se resistió a cualquier compromiso, ni siquiera en la forma más leve, por parte de los Estados Unidos. Los altos cargos estadounidenses, que querían reducir al mínimo la probabilidad de verse al final forzados a intervenir en África, trataron de mostrar a un Congreso estadounidense escéptico ante las Naciones Unidas, que habían ajustado sus planteamientos sobre las misiones de paz y aprendido, en palabras del presidente, a «decir que 'no'». Al igual que habían hecho en la guerra de Bosnia, los Estados Unidos y los funcionarios europeos siguieron adelante evitando denominar «genocidio» a esta carnicería. Esto era en parte debido al miedo a abrir la vía a sus obligaciones derivadas de la Convención del Genocidio, pero también se debía en gran medida al intento de evitar el estigma moral asociado con haber permitido lo que Lemkin describió como «el último crimen».

En suma, los Estados Unidos y sus aliados europeos apoyaban con toda su alma la máxima de «Nunca Jamás» mientras toleraban indecibles atrocidades cometidas a plena luz. Las personalidades, ideologías y limitaciones geopolíticas han ido cambiando con el tiempo, pero las primeras potencias se han negado de forma constante a correr los riesgos de suprimir el genocidio. Independientemente del crecimiento de la conciencia pública sobre el Holocausto y del triunfalismo sobre el ascenso de los valores liberales democráticos, la última década del siglo xx fue una de las más mortíferas en el registro del más lúgubre de los siglos.

El genocidio ocurrió después de la guerra fría, después del desarrollo de los grupos de derechos humanos, después de la explosión de las comunicaciones instantáneas, y después de la erección del Museo del Holocausto en Washington D. C. De modo perverso, la conciencia pública del Holocausto con frecuencia parece que ha puesto el listón para la preocupación tan alto que los ciudadanos y los estadistas fueron capaces de decirse a sí mismos que los genocidios contemporáneos no le llegaban a la altura. Como señaló el escritor David Rieff, «nunca jamás» puede ser definido de mejor ma-

nera como «Nunca jamás los alemanes volverán a matar a los judíos en Europa en los años 1940». Ya sea volviendo los ojos, ya sea atendiendo a preocupaciones estratégicas y políticas más apremiantes, los líderes occidentales han denunciado repetidamente el Holocausto y permitido el genocidio.

Lo más chocante en la reacción de lo que Lemkin denominaba ‘mundo civilizado’ ante esos genocidios del siglo xx, no es que las potencias occidentales no desplegaran sus fuerzas de tierra para combatir las atrocidades sino que a lo largo de su intervención —desde la meramente retórica a la agresivamente militar— hicieran muy poco para impedir el crimen. Puesto que no se consideraba que sus «intereses nacionales vitales» estuvieran en peligro por el mero genocidio, en muy raras ocasiones se tomó en consideración la posibilidad de la intervención militar. Y como tal intervención no fue considerada, los funcionarios de alto rango de Europa y Estados Unidos con frecuencia tampoco se involucraron en el debate sobre las opciones políticas alternativas. En lugar de dar al genocidio la atención moral que merecía y, al menos, denunciar vigilantemente a los perpetradores, los gobiernos occidentales confiaron de forma repetida en la negociación, se aferraron a las sutilezas diplomáticas y a la neutralidad, y enviaron ayuda humanitaria.

De hecho, hubo veces en que los poderes occidentales directa o indirectamente ayudaron a los que estaban cometiendo genocidio. Comenzando en 1979 y siguiendo a lo largo de los años 1980, los Estados Unidos orquestaron el voto de las Naciones Unidas para mantener el reconocimiento de los Jemeres Rojos. Las potencias occidentales se alinearon con Irak y le suministraron créditos, inteligencia militar y armas mientras Hussein estaba intentando eliminar a los kurdos iraquíes. Las grandes potencias utilizaron su influencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ordenar la retirada de la misión de paz de la ONU en Ruanda y para bloquear el despliegue de refuerzos. Mantuvieron un embargo de armas contra los bosnios musulmanes incluso después de que estuviera claro que el embargo impedía que los musulmanes se auto-defendieran. E hicieron promesas a la gente de Srebrenica y Ruanda, promesas que no tenían la intención de cumplir.

Casi un siglo después de el «asesinato racista» de los armenios y más de medio siglo después de la liberación de los campos de la muerte nazis, la cuestión crucial es ¿por qué hombres y mujeres decentes, que creen firmemente que «nunca jamás» debe volver a permitirse el genocidio consienten que éste ocurra? La respuesta más típica que se ha dado a esta pregunta a lo largo de todo el siglo xx es «No sabíamos». Pero esto, simplemente, no es verdad. Es cierto que la información que procede de los países victimizados por el genocidio es imperfecta. El personal de las embajadas fue retirado, los informes de inteligencia sobre el terreno fueron escasos, los editores

generalmente se mostraron reticentes a enviar a sus reporteros a lugares en los que no estaban comprometidos los intereses occidentales y en los que tampoco había lectores occidentales y los periodistas que intentaron informar sobre las atrocidades vieron limitada su movilidad. Como resultado, las afirmaciones de los refugiados eran difíciles de confirmar y resultaba muy difícil establecer un recuento de los cadáveres. Puesto que el genocidio se suele ocultar tras la cobertura de la guerra, cuando comenzaron las matanzas algunos funcionarios occidentales tuvieron dificultades genuinas para distinguir en un primer momento el genocidio del conflicto convencional.

Pero aunque los gobiernos occidentales no sabían todo lo que había que saber sobre la naturaleza y la escala de la violencia, sí sabían mucho. Embajadores bien conectados y jóvenes analistas de los servicios de inteligencia enviaron un continuo flujo de información, tanto con advertencias previas antes del genocidio, como con vívida documentación durante el mismo, una información que siguió la escala hasta llegar a los funcionarios con capacidad de decisión. Gran parte de los mejores informes de inteligencia apareció en los diarios matutinos. Volviendo a 1915, cuando las comunicaciones eran mucho más primitivas, el *New York Times* se las arregló para publicar 145 historias sobre la masacre de los armenios por los turcos. Durante el Holocausto, aunque las historias de la exterminación de los judíos no recibieron casi en ninguna parte la prominencia que merecían, sí que aparecieron con regularidad. En 1994 el *Times* informaba, justo tres días después del comienzo del genocidio en Ruanda, que «decenas de miles» de ruandeses habían sido asesinados. Y dedicó más columnas a los horrores de Bosnia entre 1992 y 1995 de los que dio a ninguna otra noticia extranjera.

Con los avances en la tecnología y en la vigilancia de los grupos de derechos humanos, los líderes occidentales han comenzado a apoyarse en una segunda afirmación: «No nos dimos realmente cuenta». Eso es lo que dijo el presidente Clinton en las disculpas que presentó en Ruanda cuatro años después del genocidio: «No nos dimos realmente cuenta de la profundidad y la rapidez del inimaginable terror que os devoraba. También esta afirmación es engañosa. Es cierto que las atrocidades que eran conocidas seguían siendo remotas y abstractas y que raramente llegaron a ser un conocimiento generalizado entre los ciudadanos ordinarios. Como el salvajismo del genocidio desafiaba nuestra experiencia cotidiana, muchos de nosotros no llegamos a comprender lo que nunca hemos sentido en carne propia. Los armenios, los judíos, los camboyanos, los tutsis, los bosnios y otros supervivientes y testigos han tenido dificultades para hacer «creíble lo increíble». Los espectadores fueron por ello capaces de habitar en lo que, en la segunda guerra mundial, un teólogo protestante denominó como «el crepúsculo entre saber y no saber»

Pero hemos de hacernos responsables de nuestra incredulidad. El Holocausto está demasiado presente en nuestros textos escolares y en nuestra cultura actual como para que el genocidio sea algo «inimaginable». Deberíamos haber aprendido mucho antes a confiar incluso en aquellos relatos que no podían ser independientemente verificados. Las historias que emergen de las sociedades genocidas son, por definición, «increíbles». Esos pensamientos que confunden los deseos con la realidad han sido desacreditados una y otra vez y esto debería habernos hecho desplazar la carga de la prueba y no ponerla en los acosados refugiados sino en los escépticos que los ponen en duda y a los que habría que pedir que presentaran convincentes razones para poner en cuestión las afirmaciones de los refugiados. Optar por creer nos hará mucho menos daño que optar por lo contrario. En lugar de tratar de conocer con energía y en profundidad los hechos o de publicar lo que se conocía hasta el momento, los funcionarios occidentales se ampararon en la neblina de la plausibilidad de la negación. Frente al genocidio, la búsqueda de certeza se convirtió con frecuencia en una excusa para la parálisis y el aplazamiento. En muchos casos de genocidio aquellos que «no sabían» o «no se daban realmente cuenta» eligieron no hacerlo.

La segunda respuesta consoladora que normalmente se ofrece a la cuestión de por qué las principales potencias hicieron tan poco para detener el genocidio es que cualquier intervención hubiera resultado vana. Cada vez que los Estados han comenzado a asesinar y a deportar a sus ciudadanos, los funcionarios occidentales han sostenido que las medidas propuestas harían muy poco para detener los horrores o que harían más mal que bien. Generalmente citaban esta falta de capacidad para mejorar el sufrimiento como la razón central para permanecer sin comprometerse. Si los odios eran «antiguos» y «de doble faz» como generalmente se sostenía, y si las «partes» habían estado matándose los unos a los otros «durante siglos» la conclusión era que seguirían matándose durante siglos los unos a los otros. Por tanto, era muy poco lo que realmente podía lograr un grupo bienintencionado de ayudantes humanitarios extranjeros entrometiéndose en ello.

Es difícil afirmar, en retrospectiva, lo que una intervención diplomática, económica, legal o militar determinada podría haber logrado o cuánto habría costado. Todo lo que sabemos es que los perpetradores del genocidio conocían muy bien las tácticas de sus predecesores así como la respuesta mundial que provocaron. Sacaron lecciones de sus brutales precursores. Lo hicieron en todos los terrenos, desde la deshumanización de sus víctimas y el despliegue de eufemismos a la construcción de campos de concentración y el ocultamiento de sus rastros. Y del mundo de fuera aprendieron la lección de la impunidad. El ministro turco del interior, Tallat Pasha, era consciente de que el sultán Abdul Hamid II había

salido impune tras la matanza de los armenios en 1895. En 1939 Hitler se había envalentonado con el hecho de que absolutamente nadie «recordaba a los armenios». Sadam Hussein notó que la comunidad internacional relajó la respuesta a su empleo de armas químicas contra Irán o a su demolición de los pueblos kurdos. Concluyó, con acierto, que no sería castigado por utilizar gases venenosos contra los kurdos. Los ruandeses armados se enfrentaron deliberadamente con los integrantes de la misión de paz belga al principio de su genocidio porque sabían, tras la reacción de los Estados Unidos ante la muerte de dieciocho soldados estadounidenses en Somalia, que el asesinato de soldados occidentales precipitaría su retirada. Los serbo-bosnios celebraron públicamente las muertes de Mogadiscio sabiendo que nunca tendrían que luchar con el ejército de tierra estadounidense. Slobodan Milosevic comprobó cómo había salido inmune de la brutal supresión de los movimientos de independencia en Eslovenia y Croacia y pensó que no tendría que pagar precio alguno por hacer lo mismo en Bosnia y Kosovo. Puesto que tantos perpetradores individuales estaban asesinando por primera vez y decidiendo diariamente hasta qué extremos estaban dispuestos a llegar, los Estados Unidos y sus aliados europeos perdieron una serie de oportunidades críticas para tratar de detenerles. El que las potencias occidentales ignoraran el genocidio en todo el mundo no significa que estuvieran dando «luz verde» a los perpetradores. Pero dado que los asesinos se decían a sí mismos que estaban haciendo un favor al mundo al «limpiarlo» de los «indeseables», algunos seguramente interpretaron el silencio como consentimiento e, incluso, apoyo.

Aunque resulta imposible saber el impacto de los pasos que nunca se han dado, el mejor testimonio de lo que las potencias occidentales pudieron haber logrado es lo que realmente lograron. Porque, tras todas las afirmaciones sobre la inutilidad de la intervención extranjera, en las raras ocasiones en que los Estados Unidos y sus aliados dieron incluso unos pequeños pasos, el resultado es que salvaron vidas. Después de que los esfuerzos hechos por el senador Pell a favor de las sanciones forzaran a un reticente gobierno Reagan a condenar los ataques de gas por parte de Sadam Hussein, el dictador iraquí no volvió a utilizar el gas contra los kurdos. En 1991, después de los llamamientos de Turquía y del encuentro personal del Secretario de Estado de los Estados Unidos James Baker con los refugiados kurdos, los aliados consiguieron crear un refugio seguro para los kurdos en el norte de Irak, permitiendo que más de un millón de kurdos volvieran a sus casas. En una escala más reducida un propietario de un hotel en Ruanda afirma que la mera llamada por teléfono de un diplomático estadounidense disuadió a las milicias de atacar a los habitantes tutsis del hotel durante el genocidio. Los 503 pacificadores de las Naciones Unidas

que permanecieron en Ruanda durante el genocidio protegieron la vida de unos 25.000 ruandeses. El bombardeo de Bosnia por la OTAN, cuando finalmente se produjo, permitió poner un rápido final a una guerra de tres años y medio. Aunque imperfecto, el bombardeo de Kosovo por la OTAN en 1999 liberó a un millón setecientos mil albaneses del tiránico gobierno serbio. Y un puñado de detenciones hechas por la OTAN en la antigua Yugoslavia ha hecho que docenas de presuntos criminales de guerra hayan sido llevados ante el tribunal penal de crímenes de guerra de las Naciones Unidas. Aunque no se pueda afirmar que cada una de las medidas propuestas hubiera sido efectiva, no hay duda de que incluso estos pasos, pequeños y tardíos, salvaron cientos o miles de vidas. Si los poderes occidentales hubieran hecho una prioridad de la prevención del genocidio habrían podido salvar un número muy superior.

La razón real por la que Estados Unidos y los estados europeos no han hecho todo lo que podían y debían haber hecho para parar el genocidio no fue una falta de conocimiento o de capacidad, sino una falta de voluntad. Dicho llanamente, los líderes occidentales no actuaron porque no quisieron hacerlo. Creían que el genocidio estaba mal, pero no estaban dispuestos a invertir el capital militar, financiero, diplomático y político necesario para hacerlo. Las políticas diseñadas en respuesta a cada uno de los grandes genocidios del siglo xx no fueron accidentales resultados de una negligencia. Fueron elecciones concretas hechas por los más influyentes centros de decisión mundial después de sopesar implícita y explícitamente los costes y los beneficios. Una de las conclusiones más importantes y reticentes que se puede extraer es que el historial del mundo «civilizado» no es el de un fracaso. Es un historial de «éxito». El sistema funcionó.

Para aclarar este punto veamos específicamente los objetivos de los políticos en los Estados Unidos. Las respuestas europeas han tendido, o bien a ser llevadas por motivaciones similares a las de los políticos estadounidenses, o bien los aliados europeos han seguido directamente la dirección de los Estados Unidos. Desde el genocidio armenio en adelante, el ejecutivo estadounidense (generalmente con el apoyo pasivo de los miembros del Congreso) ha tenido dos objetivos. En primer lugar, quería evitar verse involucrado en los conflictos que planteaban pocas amenazas para los intereses americanos, definidos estrechamente. En segundo lugar, esperaba contener los costes políticos y evitar el estigma moral asociado con haber permitido el genocidio. En líneas generales se lograron ambos objetivos. Con el fin de refrenar el coste político los funcionarios estadounidenses exageraron la ambigüedad de los hechos. Agrandaron las probables desventajas asociadas a cualquier intervención que se propusiera. Y evitaron con energía la utilización del término «genocidio», el cual consideraban que conllevaba

unos imperativos legales y morales (y, en consecuencia, políticos) que obligaban a actuar. Y se consolaron con las operaciones normales de la burocracia de asuntos exteriores, que permitía una ilusión de deliberaciones continuas, actividad compleja e intensa preocupación.

Para entender por qué los Estados Unidos no hicieron más para contener el genocidio no es suficiente, por supuesto, enfocar únicamente las acciones de los presidentes americanos o de sus equipos de política exterior. En una democracia, incluso una administración que no esté dispuesta a actuar puede ser presionada para que actúe. Esta presión puede venir tanto desde dentro como desde el exterior. Los burócratas que están dentro del sistema en el que se toman las decisiones pueden presionar pacientemente o agitar enérgicamente con la esperanza de forzar a sus jefes a tomar una amplia gama de opciones. Desgraciadamente, mientras que cada genocidio generó cierto activismo dentro de los miembros del establecimiento de política exterior estadounidense, los funcionarios de la administración civil y exterior de los Estados Unidos por lo general se atuvieron a lo que consideraban era indiferencia presidencial y apatía pública. Dieron por hecho que la política estadounidense era inmutable, que sus preocupaciones ya eran comprendidas por sus jefes y que denunciar o manifestarse sólo reduciría su capacidad para mejorar la política.

Pero la razón principal por la que los líderes americanos pueden continuar mirando hacia otro lado es que el genocidio en tierras lejanas no ha cautivado a los senadores americanos, a los dirigentes del Congreso, a los grupos de presión de Washington, a la élite de los creadores de opinión, a los grupos de base y a los ciudadanos individuales. La lucha para detener el genocidio ha sido pérdida de forma repetida en el terreno de la política interna. Aunque haya habido voces aisladas que hayan protestado por las atrocidades, los americanos que están fuera de las ramas del ejecutivo permanecieron por lo general mudos cuando era importante no hacerlo. Como resultado de este silencio social generalizado los funcionarios de todos los niveles del gobierno calcularon que los costes políticos de verse comprometidos en la prevención del genocidio excedían con mucho a los costes de permanecer ajenos.

Aquí, la excepción que confirmó la regla fue la campaña aérea de la OTAN en Bosnia. Bosnia fue el único genocidio del siglo xx que generó una oleada de dimisiones dentro del gobierno de los Estados Unidos. No es probablemente una coincidencia que éste fuera el único caso en el que las protestas de los funcionarios americanos que prestaban sus servicios en Exteriores se vieron diariamente legitimadas por el activismo del público y la prensa fuera de Foggy Bottom. La OTAN intervino con un gran bombardeo en agosto de 1995, cuando la campaña del ejército croata contra las

fuerzas serbias rebajó su cálculo del coste de la intervención y cuando el voto del Congreso de los Estados Unidos a favor de levantar unilateralmente el embargo de armas contra los musulmanes bosnios les forzó a calcular los costes de la *no* intervención. El levantamiento del embargo incomodó a Clinton porque la política exterior estaba siendo hecha en Capitol Hill por Bob Dole, el líder de la mayoría del Senado y un posible futuro competidor en la lucha por la presidencia. También parecía probable que los gobiernos europeos fueran a sacar a sus misiones de paz fuera de los Balcanes, lo que hubiera requerido la participación de la infantería estadounidense en una misión de rescate potencialmente sangrienta y ciertamente humillante. Este escenario fue el que el presidente Clinton quiso evitar en vísperas de su lucha por la reelección.

En un momento en el que había crisis de política exterior por todo el mundo, crisis en las que estaban involucrados intereses estadounidenses más tradicionales, raramente el asesinato de civiles iba a conseguir, por sus propios méritos, atención en los altos niveles. Es precisa una presión política para poner al genocidio «en el mapa», en Washington o en cualquiera de las capitales europeas. Cuando Alison des Forges, de Human Rights Watch, se reunió con el Consejero Nacional de Seguridad Anthony Lake a los dos meses del genocidio de Ruanda éste la informó que los teléfonos no estaban sonando. «Hagan más ruido», pidió. Es debido a que se ha hecho tan poco ruido sobre el genocidio por lo que los funcionarios de los Estados Unidos se han opuesto a la intervención americana, firmemente convencidos de que estaban haciendo cuanto podían —y, lo más importante, cuanto debían— teniendo en cuenta los enfrentados intereses americanos, así como una muy limitada visión de lo que era internamente «posible».

Aunque los funcionarios estadounidenses han expresado a veces remordimientos después del genocidio, ninguno de ellos teme una responsabilidad profesional por su pecado de omisión. En los años 1970 las vistas del Senado en Capitol Hill documentaron abusos en América Latina, en el Sureste asiático y en otros lugares, cometidos por los Estados Unidos y sus aliados de la guerra fría. Como resultado de este reconocimiento público y de algunos controles formales establecidos en consecuencia, los políticos estadounidenses temen ahora las repercusiones de sus decisiones en política exterior, las de sus pecados de acción, que se derivan de las decisiones que toman y de las políticas que establecen y que van mal. Pero, mientras que en el gobierno de los Estados Unidos todo el mundo tiene el incentivo de evitar «otra Somalia» u «otro Vietnam», muy pocos se lo piensan dos veces antes de hacer algo que permita «otro Ruanda».

Otros países e instituciones cuyo personal estaba presente cuando se cometió el genocidio se han visto forzados a ser más in-

trospectivos. Los Países Bajos, Francia y las Naciones Unidas han llevado a cabo investigaciones sobre su responsabilidad por la caída de Srebrenica y por las masacres que siguieron. Las investigaciones no condujeron a ninguna reforma política notable, pero al menos «nombraron nombres» que pueden afectar al comportamiento de los burócratas en el futuro. Los Estados Unidos no ha mirado retrospectivamente, Cuando los investigadores de la ONU sobre Srebrenica se acercaron a la misión de los Estados Unidos en Nueva York en demanda de ayuda, sus llamadas de teléfono no fueron contestadas. Al final, se prohibió al equipo de la ONU que hiciera ningún contacto independiente con los empleados del gobierno de los Estados Unidos. Se garantizó a los investigadores el acceso a un grupo de oficiales jóvenes y de niveles medios elegidos a mano que no sabían, o no revelaron, casi nada sobre lo que los Estados Unidos supo durante la matanza de Srebrenica.

Los franceses, los belgas, la ONU y la Organización para la Unidad Africana han emprendido investigaciones sobre el genocidio de Ruanda. Pero en los Estados Unidos, se rechazó el intento hecho por Cynthia McKinney y Donald Payne, dos miembros descontentos del Caucus de los Congresistas Negros (el Congressional Black Caucus, que había permanecido callado durante las masacres de 1994), de llevar a cabo una investigación sobre el papel de los Estados Unidos. Dos funcionarios de la administración Clinton, uno del Consejo Nacional de Seguridad, el otro del Departamento de Estado, dirigieron estudios internos sobre la respuesta de la administración en el genocidio de Ruanda. Pero únicamente siguieron la pista de los papeles y no hicieron públicos los resultados de sus investigaciones. Lo que se precisa son investigaciones parlamentarias con capacidad de acceder a los documentos y con poder de citación de los funcionarios estadounidenses, tanto del ejecutivo como del legislativo, en todos sus niveles y roles. Sin una significativa revelación de los hechos, sin conciencia pública y sin vergüenza oficial, es difícil imaginar que la respuesta de los Estados Unidos pueda mejorar en el futuro.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 sobre los Estados Unidos puede que hayan alterado de forma permanente la política exterior estadounidense. La esperanza es que los ataques hagan que los americanos, de dentro y fuera del gobierno, sean más capaces de imaginar el mal cometido contra civiles inocentes. Los fanáticos que apuntaron a América se parecen a los perpetradores del genocidio al abrazar de la forma más salvaje la teoría de la responsabilidad colectiva. Atacaron a los civiles no por lo que estas víctimas involuntarias hubieran hecho personalmente sino por quiénes eran. Para ganarse una sentencia de muerte bastaba, en el pasado siglo, ser armenio, judío, o tutsi. El 11 de septiembre bastaba ser americano. En lugar de conseguir que los americanos se retiraran del

compromiso humanitario global, los ataques terroristas podrían llevarnos a empatizar con los pueblos victimizados por el genocidio. En 1994, Ruanda, un país de ocho millones de habitantes, sufrió cada día, a lo largo de cien días seguidos, el equivalente a más de dos ataques al World Trade Center. Esta equivalencia significaría doscientos treinta mil americanos asesinados cada día, o veintitrés millones de americanos asesinados en tres meses. Cuando, el 12 de septiembre de 2001, los Estados Unidos buscaron la ayuda de los aliados americanos de todo el mundo, los americanos recibieron una abrumadora respuesta. En contraste, cuando los tutsis la pidieron todos los países miraron hacia otra parte.

El temor, después del 11 de septiembre, es que los Estados Unidos vean la prevención del genocidio como un lujo que no pueden permitirse y que consideren que es mejor proteger a los americanos. Algunos están sosteniendo en la actualidad, de forma comprensible, que luchar contra el terrorismo precisa comprometer los recursos americanos y dejar de lado en parte el «trabajo social», como el que supone la intervención humanitaria, que podría dañar la «disponibilidad» de los Estados Unidos. Muchos creen que la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 y el actual juicio contra el presidente serbio Slobodan Milosevic, que hace un tiempo se consideró que marcaban precedentes importantes, representan de hecho puntos de referencia para la prevención y el castigo del genocidio.

El siglo pasado mostró que sin el liderazgo de los Estados Unidos otros no estarán dispuestos a dar pasos hacia delante para actuar y que el genocidio continuará. Si los Estados Unidos trata la guerra contra el terrorismo como una guerra que puede ser llevada a cabo en un vacío, sin tener en cuenta el terror *genocida*, estará cometiendo colosales errores. Hay dos razones principales por las que los Estados Unidos y sus aliados europeos han de detener el genocidio. La primera razón, y la más importante, es moral. Cuando la vida inocente es arrebatada en tal escala y los Estados Unidos y sus aliados tienen la capacidad para detener la matanza corriendo un riesgo razonable, los Estados Unidos y sus aliados tienen el deber de actuar. Es ésta la creencia que motiva a muchos de los que abogan por la intervención. Pero la política exterior no está dirigida por la moralidad, está conducida por los intereses, estrechamente definidos. Y la historia ha mostrado que el sufrimiento de las víctimas rara vez ha sido suficiente como para provocar la intervención de Occidente.

La segunda razón para la acción es que la amenaza de genocidio apunta de hecho a los intereses occidentales. Permitir el genocidio mina la estabilidad regional e internacional, crea refugiados militarizados, y apunta a los dictadores que el odio y el asesinato son herramientas permitidas en la acción del Estado. Ya que estos peligros

para los intereses nacionales son peligros a largo plazo y no inmediatamente evidentes rara vez han convencido a los políticos occidentales de primera fila. El genocidio ha minado la estabilidad regional, pero aquellas regiones desestabilizadas por los conflictos por lo general han estado fuera de las esferas de interés de Europa y de los Estados Unidos. Los refugiados han sido militarizados pero no han tendido a desembarcar en las orillas americanas. Una de las principales razones por las que los líderes europeos se comprometieron, más que sus colegas norteamericanos, en los Balcanes en los años 1990 fue el hecho de que los refugiados bosnios aterrizasen en Gran Bretaña, en Francia y en Alemania. Por lo general los dictadores se dieron cuenta de que siempre que la derrama de los costes fuera contenida localmente, el tratamiento que dieran a sus propios ciudadanos tendría poco impacto sobre la percepción de los líderes occidentales acerca de la seguridad económica o militar de sus respectivos países. La intervención sólo se produjo en las escasas ocasiones en las que se apuntó contra los intereses políticos a corto plazo de los políticos occidentales.

El liderazgo americano sigue siendo esencial para movilizar las respuestas locales, regionales e internacionales frente al genocidio. Pero si antes del 11 de Septiembre ya era difícil conseguir que los políticos estadounidenses vieran los costes que traía a largo plazo el permitir el genocidio, será incluso más difícil ahora que las necesidades de seguridad de los Estados Unidos son tan agudas. No obstante, la historia demuestra que intentar construir muros en torno de las sociedades genocidas es una garantía casi segura de futuros problemas en el camino. La seguridad americana y la seguridad para los americanos fuera del país depende de la estabilidad internacional y es posible que hoy no exista una mayor fuente de estragos que la de un grupo de extremistas bien armados decididos a eliminar a un pueblo sobre la base de sus orígenes étnicos, nacionales o religiosos.

Los estados que asesinan y atormentan a sus propios ciudadanos casi de forma inevitable amenazarán a los ciudadanos en otros lugares. Sus apetitos se hacen insaciables. Hitler comenzó persiguiendo a su propio pueblo y después expandió su campaña al resto de Europa y, si hubiera podido, a los Estados Unidos. Sadam Hussein destruyó la vida local kurda y después se volcó contra Kuwait, enviando a su secuaz genocida Ali Hassan al-Majid para gobernar el país ocupado. Los Estados Unidos tienen ahora razón para temer que las armas venenosas que Hussein utilizó contra los kurdos sean utilizadas en el futuro contra los americanos. Milosevic extendió sus guerras de Eslovenia y Croacia hacia Bosnia y, luego, a Kosovo. Los Estados Unidos y sus aliados europeos todavía están pagando por su inicial negligencia en los Balcanes teniendo que hacer frente a una creciente violencia en Macedonia que amenaza la estabilidad del sureste europeo.

Los ciudadanos victimizados por el genocidio o abandonados por la comunidad internacional no son buenos vecinos y su sed de venganza, su irredentismo y su aceptación de la violencia como medio de generar cambios puede transformarlos en futuras amenazas. En Bosnia, en donde los Estados Unidos y Europa mantuvieron un embargo de armas contra los musulmanes, proselitistas y combatientes islámicos extremistas terminaron por ofrecerles ayuda. Como consecuencia, algunos ciudadanos musulmanes laicos se radicalizaron y el fracasado estado de Bosnia se convirtió en un santuario para los terroristas islámicos rechazados en el resto del mundo. Resulta que una de las organizaciones que se infiltraron en Bosnia en estos momentos de necesidad, y que la utilizó como una base de entrenamiento, fue Al-Qaeda, la organización de Osama Bin Laden. Y por muchos que fueran los radicales islámicos que fueron importados durante, o creados por, la matanza serbia de los musulmanes bosnios, la cifra hubiera sido exponencialmente más elevada si los Estados Unidos y sus aliados hubieran permitido que las matanzas continuaran después de 1995. El actual gobierno bosnio, un legado de los acuerdos de paz de Dayton, mediados por los Estados Unidos, está lejos de ser perfecto, pero es, al menos, un socio estratégico en la guerra contra el terrorismo. Sin los bombardeos de la OTAN y el liderazgo diplomático de los Estados Unidos el mismo gobierno bosnio podía haber sido hoy un enemigo de América.

Para el próximo futuro los Estados Unidos habrán de liderar la detención y el castigo del genocidio. Es evidente que los Estados Unidos no tienen recursos como para, simultáneamente, autodefenderse de los ataques y desplegar a sus soldados en cada lugar en donde se oculte la amenaza de violencia étnica. Se ha de ser extremadamente prudente a la hora de desplegar las fuerzas estadounidenses en el extranjero. Pero las opciones políticas de los Estados Unidos no pueden estar construidas sobre la opción de o no hacer nada o enviar a los marines. Puede que haya momentos en que la magnitud del daño moral pida arriesgar la fuerza militar, pero también habrá otros en los que, debido a las pasadas intervenciones estadounidenses en la región, una intervención pueda ser especialmente inadecuada. Habrá también ocasiones en las que el riesgo para los soldados de los Estados Unidos sea mayor que los beneficios que una intervención militar pueda potencialmente proporcionar a las víctimas. Y habrá momentos en los que incluso un bienintencionado esfuerzo presidencial para convencer al pueblo americano del valor de la intervención fracase a la hora de crear un apoyo político a favor de la acción militar de los Estados Unidos.

Pero esto no significa que en tales circunstancias, y precisamente porque puede que los Estados Unidos no desplieguen sus tropas, su liderazgo deje de ser necesario, o que no se puedan in-

tentar otras formas de intervención. Los políticos americanos han de centrarse menos en tratar de evitar comprometer a los Estados Unidos y más en diagnosticar con precisión y tratar las atrocidades que se están cometiendo. Denominar genocidio de forma deliberada a algo que no lo es —«guerra civil» o «violencia tribal»— con el fin de lograr que la presión pública enmudezca, no sólo es deshonesto, es perjudicial para una política sensata. Tratar las atrocidades como una guerra ha llevado al despliegue de los expertos en resolución de conflictos, al fracasado intento de conseguir la firma de ceses del fuego y a una inversión, que crece en espiral, en los «procesos de paz» que muchas veces acaban transformándose en artificios para ganar tiempo y que, de hecho, protegen el asesinato. Denominar abiertamente genocidio lograría el apoyo público para utilizar la fuerza militar de los Estados Unidos.

En vez de mirar la intervención como una propuesta de todo o nada, los Estados Unidos y sus aliados deberían contestar al genocidio identificando públicamente y amenazando a sus perpetradores con el enjuiciamiento criminal, pidiendo la expulsión de los representantes de los regímenes genocidas de las instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, cerrando las embajadas de los perpetradores en las capitales occidentales y pidiendo a los países alineados con los perpetradores que utilicen su influencia con ellos. Dependiendo de las circunstancias, las potencias occidentales podrían establecer sanciones económicas o congelar las cuentas extranjeras, imponer el embargo de armas, o, si está garantizado, levantar el embargo. Pueden utilizar sus recursos técnicos para colapsar las emisiones de radio o televisión llenas de soflamas, que son esenciales para la propaganda, el miedo y el odio. Podrían establecer áreas de seguridad para acoger a los refugiados y a los civiles, y defenderlas recurriendo a cuerpos de paz bien armados y enérgicamente mandados, a la aviación o a ambas cosas.

La prevención del genocidio es una inmensa carga y es una carga que ha de ser compartida. Pero incluso si el ejército de los Estados Unidos se queda en casa, el liderazgo americano será indispensable para reunir «coaliciones de los que tienen voluntad» para desplegar la infantería, estimular a los aliados de los Estados Unidos para aumentar sus capacidades y reforzar las instituciones regionales e internacionales que finalmente podrían llevar sobre sí la mayor parte de la carga.

Durante casi toda la segunda mitad del siglo xx la existencia de la Convención del Genocidio parece que logró muy poco. Los Estados Unidos tardaron cuarenta años en ratificar la Convención. Aquellos países que la ratificaron nunca la invocaron para detener o castigar el genocidio. Y, en lugar de hacer que los políticos occidentales se sintieran más inclinados a parar el genocidio, parecería

que lo único que lograba la ratificación era hacerles aún más reticentes a la hora de emplear la «palabra-g». De todos modos, el término acuñado por Lemkin ha hecho más bien que mal. Es improbable que los tribunales internacionales de la antigua Yugoslavia y Ruanda o el Tribunal Penal Internacional hubieran podido existir sin la aprobación de la Convención. El castigo que tiene lugar en dichos tribunales ayudará a largo plazo a detener el genocidio. Pero, lo que es más fundamental, sin la existencia de la Convención, o del proselitismo de Lemkin sobre el tema, el término genocidio no conllevaría el estigma moral que ha adquirido. La esperanza del cumplimiento de la Convención del Genocidio radica en el estigma que se asocia con la comisión y *la permisión* del crimen de genocidio. Y, paradójicamente, en la medida en que los políticos occidentales han jurado no permitir nunca jamás el genocidio y en la medida comparable en que esos mismos políticos han negado su existencia, permitiendo que ocurriera.

Ya que es poco probable que los líderes occidentales tengan la visión suficiente para reconocer que ponen en peligro los intereses vitales a largo plazo de sus países al permitir el genocidio, la esperanza más realista para combatirlo reside en que el resto de nosotros cree costes políticos a corto plazo para aquéllos que no hacen nada.

Traducción: Carmen López Alonso

RESUMEN

El examen de las respuestas dadas por las potencias occidentales ante el genocidio en el siglo xx indica que el modelo de comportamiento ante el ascenso y dominio de Hitler se repite en las reacciones de los Estados Unidos y Europa ante las carnicerías de los años noventa en Yugoslavia y Ruanda, medio siglo después de la Convención del Genocidio. La inacción no es fruto de la ignorancia o de la imposibilidad de actuar, sino de una decisión política sobre los costes de la intervención y de una decidida voluntad de no intervenir. El coste de la inacción frente al genocidio es elevado, no sólo desde un punto de vista moral, sino también social y político, ya que puede minar la estabilidad regional e internacional, como el 11S ha mostrado. Un camino real para combatir la inacción de los políticos en las democracias occidentales es crear un coste político a corto plazo para quienes no hacen nada.

ABSTRACT

The examination of the responses given by Western countries to genocide in the 20th Century proves that the behavioural pattern established *vis à vis* the rise and domination of Hitler is replicated in American and European responses to the carnage in Yugoslavia and Rwanda in the 90s, half a century after the Convention on Genocide. In this case the lack of action is not a result of ignorance, or of the impossibility to intervene; it is caused by a political decision about the costs of intervention, and hence the result of a lack of willingness. Nevertheless, the cost of inaction face to genocide is high, not just from the moral point of view but because of its social and political consequences. It can undermine regional and international stability, as the 11th September has shown. Creating short-term political costs for those who do nothing may be a good way of correcting this kind of behaviour.

Samantha Power es Lecturer de Public Policy en la Harvard's John F. Kennedy School of Government. «*A Problem from Hell*»: *America and the Age of Genocide*, su libro más reciente, ha sido galardonado con el Premio Pulitzer para obras de no ficción en el año 2003, con el Premio del National Book Critics Circle para obras de no ficción en 2003, y con el Premio del Council on Foreign Relations' Arthur Ross para el mejor libro publicado sobre política exterior de los Estados Unidos. Samantha Power fue directora ejecutiva fundadora del Carr Center for Human Rights Policy (1998-2002). Entre 1993 y 1996, Power cubrió las guerras de la antigua Yugoslavia como reportera para la U. S. News, *World Report*, el *Boston Globe*, y *The Economist*. Junto con Graham Allison es editora de *Realizing Human Rights: Moving from Inspiration to Impact* (St. Martin's, 2000). Graduada por la Universidad de Yale y por la Harvard Law School, se estableció en los Estados Unidos, procedente de Irlanda, a la edad de nueve años.